

I. Alemania

1. Los proveedores de acceso a Internet no están obligados a revelar datos de sus clientes

2. Derecho Bancario y Financiero

II. Austria

1. Derecho Procesal Civil
2. Derecho Contractual

III. Suiza

1. Abrogación de la Lex Koller
2. Derecho Bancario

IV. España

1. Asistencia Jurídica Gratuita
2. Derecho de Propiedad Intelectual
3. LEY 6/2005, de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (BOE de 23/04/2005).

I. Deutschland

1. Keine Pflicht eines Access-Providers zur Auskunft über Kundendaten

2. Bank & Finanzrecht

II. Österreich

1. Zivilprozessrecht
2. Vertragsrecht

III. Schweiz

1. Aufhebung der Lex Koller
2. Bankrecht

IV. Spanien

1. Prozesskostenhilfe
2. Urheberrecht
3. Gesetz 6/2005, vom 22 April, über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (Spanische Gesetzblatt (BOE 23/04/2005))

I. Alemania



1. Los proveedores de acceso a Internet no están obligados a revelar eos datos de sus clientes

Sentencia del Tribunal Regional Superior hanseático de 28 de abril de 2005

¿Están los proveedores de acceso a Internet („Internet-Access-Provider“), quienes suministran acceso a Internet a sus clientes, obligados a revelar la identidad de estos, cuando dichos clientes ofrezcan música en formato MP3 de manera ilegal en Internet? El Tribunal Regional Superior Hanseático (*equivalente a un Tribunal Superior de Justicia en España*) respondió negando dicha obligación.

El Supuesto de Hecho

Un proveedor de acceso a Internet („Proveedor“) había, en el marco de su actividad comercial, puesto a disposición de su cliente el acceso a Internet y le había asignado una dirección IP (“código numérico que identifica a un ordenador específico en Internet”). Dicho cliente ofrecía a terceros mediante esta conexión a Internet, bajar archivos de datos de música en formato MP3, para lo cual no estaba autorizado según la normativa alemana de propiedad

I. Deutschland



1. Keine Pflicht eines Access-Providers zur Auskunft über Kundendaten

Hanseatisches Oberlandesgericht, Urteil vom 28. April 2005

Hat ein Internet-Zugangs-Vermittler („Internet-Access-Provider“), der seinen Kunden den Zugang zum Internet verschafft, die Pflicht, Auskünfte über die Identität dieser Kunden zu geben, wenn sie illegal MP3-Musik im Internet anbieten? Das Hanseatische Oberlandesgericht verneinte diese Frage.

Der Sachverhalt

Ein Internet-Access-Provider („Provider“) hatte im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit seinem Kunden die Verbindung zum Internet zur Verfügung gestellt und eine feste IP-Adresse zugeteilt. Der Kunde bot unter Nutzung dieser Internetverbindung Dritten den Download von MP3-Musikdateien an, wozu er aber urheberrechtlich nicht berechtigt war. Eines der großen deutschen Unternehmen der Tonträgerindustrie („Musikunternehmen“), das

intelectual. Una de las compañías alemanas más fuertes en el campo de la reproducción de soportes de sonido („Compañía“), alegó que ella era quien estaba legalmente autorizada para el uso de estos derechos de propiedad intelectual, y en base a esto solicitó la obtención de datos personales del citado cliente en el marco de un procedimiento cautelar ante el Tribunal Regional Superior Hanseático.

La Compañía apoyaba la reclamación de su derecho a ser informada, en lo dispuesto en el Art. 101a de la Ley de Propiedad Intelectual Alemana (en adelante “*UrhG*”). De acuerdo con dicho precepto, el titular de un derecho de propiedad intelectual puede solicitar, en el marco de una medida cautelar, información por parte del infractor acerca de la procedencia y canal de distribución de la reproducción de la obra, cuando se lesione su derecho a través de la difusión o reproducción de la obra en el tráfico mercantil.

La decisión

El Tribunal Regional Superior Hanseático fundamentó su decisión desestimatoria, en que no constaba la infracción evidente por parte del Proveedor, tal y como requiere el Art. 101a *UrhG*. Este precepto contempla - atendiendo al texto literal y finalidad de la ley – únicamente el supuesto de reproducción y distribución de reproducciones “corpóreas” (*körperlichen*) de la obra. Cuando se graba y baja del Internet archivos de datos de música en formato MP3 se da sólo una puesta a disposición del público de la obra “incorpórea” (*unkörperliche*), supuesto al que el Art. 101a *UrhG* no se refiere. Además no cabe la aplicación analógica de este precepto, ya que - entre otras cosas - según se desprende de la finalidad de la norma, no se trata de un vado legal contrario a la voluntad del legislador. El precepto tiene un carácter excepcional y no hay indicios de que el defecto de regulación tenga origen en un olvido del legislador, en la elaboración del Art. 101a *UrhG*, de hacer referencia a la puesta a disposición pública.

Tampoco se encontró ningún otro fundamento jurídico para justificar el solicitado derecho a ser informado.

Declaraciones adicionales

El Tribunal Regional Superior Hanseático, a parte de rechazar la medida cautelar, realizó varias declaraciones adicionales en cuanto al derecho a reclamar información, a fin de aclarar la situación jurídica actual. Así, se determinó que los proveedores de acceso a Internet no eran ni autores ni copartícipes

vorgab, Nutzungsberechtigte dieser Urheberrechte zu sein, verlangte daraufhin Auskunft über die Personalien dieses Kunden im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht.

Das Musikunternehmen stützte seinen Auskunftsanspruch auf § 101a Urhebergesetz (UrhG). Nach dieser Vorschrift kann der Inhaber eines Urheberrechts im Falle einer offensichtlichen Verletzung seiner Rechte durch Herstellung oder Verbreitung von Vervielfältigungstücken im geschäftlichen Verkehr eine einstweilige Verfügung beantragen und vom Verletzter Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der Vervielfältigungsstücke verlangen.

Die Entscheidung

Das Hanseatische Oberlandesgericht begründete seine abweisende Entscheidung damit, dass es an einer offensichtlichen Rechtsverletzung durch den Provider im Sinne von § 101a UrhG fehle. Diese Vorschrift erfasse nach Wortlaut und Gesetzeszweck nur die Vervielfältigung und Verbreitung von körperlichen Vervielfältigungsstücken. Beim Speichern und Herunterladen von MP3-Dateien liege aber nur eine (unkörperliche) öffentliche Zugänglichmachung vor, die von § 101a UrhG nicht erfasst sei. Es verbiete sich auch eine analoge Anwendung dieser Vorschrift, da es unter anderem an einer planwidrigen Regelungslücke fehle. Die Vorschrift habe Ausnahmecharakter und es seien keine Anzeichen dafür gegeben, dass der Gesetzgeber bei Schaffung des § 101a UrhG eine Bezugnahme auf die öffentliche Zugänglichmachung übersehen habe.

Auch seien keine anderen Rechtsgrundlagen für den gewünschten Auskunftsanspruch ersichtlich.

Zusätzliche Ausführungen

Das Hanseatische Oberlandesgericht machte trotz Abweisung der einstweiligen Verfügung weitergehende Ausführungen zu einem Auskunftsanspruch, die ein klareres Bild über die Rechtslage verschaffen sollten. Es stellte fest, dass der Internet-Access-Provider weder Täter noch

de la infracción del derecho, ya que sólo pusieron a disposición de sus clientes el acceso a Internet. Además el juzgado negó que hubiese un derecho a reclamar contra el proveedor de acceso a Internet en concepto de responsabilidad por las “molestias” ocasionadas (*Störerhaftung*). Alguien que “molesta” (*Störer*) de acuerdo con dicho concepto, es aquel quien de manera indirecta, intencionada, cumpliendo el requisito de causalidad y que a pesar de que pudo impedirlo, participa en la infracción del derecho de un tercero. Aunque cabe la duda de que el proveedor de acceso a Internet pueda haber “moleestado” (*Störer*), ya que la infracción sólo pudo ejecutarse mediante la conexión a Internet. De todos modos, el concepto de responsabilidad por “molestias” (*Störerhaftung*) sólo comprende, según el Tribunal Regional Superior Hanseático, una obligación de eliminar la molestia y dejar de molestar, pero no de informar.

Comentario final

La comunidad de intercambiadores de archivos („*File-Sharing-Community*“) han recibido esta sentencia con entusiasmo. Los titulares de derechos de propiedad intelectual han reaccionado decepcionados, ya que resulta difícil identificar, fuera de un procedimiento penal, a quienes lesionan derechos de propiedad intelectual. A estos una vez más, se les “cerciora” de la anonimidad que reina en Internet.

2. Derecho Bancario y Financiero

La Ley reguladora del Registro de Refinanciación entra en vigor

Con la instauración del Registro de Refinanciación se posibilita, en relación con determinados activos, la simplificación del proceso de titularización de créditos a través de una enajenación ficticia de estos (*True-Sale Fiktion*), en el caso de que la institución originariamente titular del crédito resulte insolvente

I. El Registro de Refinanciación es aprobado por la Cámara Alta Alemana

Después de que la Asamblea Federal Alemana (órgano equivalente al Congreso) le diese el 30 de junio de 2005 el visto bueno a la Ley para la Reorganización y la Administración Financiera y para la Creación del Registro de Refinanciación (en adelante: “Ley reguladora del Registro de Refinanciación”), la Cámara Alta Alemana (órgano equivalente al Senado) aprobó dicha Ley el pasado 8

Teilnehmer an der Rechtsverletzung sei, da er nur den Zugang zum Internet bereitstelle. Daneben verneinte das Gericht einen Anspruch gegen den Internet-Access-Provider nach den Grundsätzen der Störerhaftung. Ein Störer ist nach diesen Grundsätzen derjenige, der mittelbar willentlich und adäquat kausal an der Rechtsverletzung eines Dritten mitwirkt, sofern er die Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hat. Zwar kommt der Internet-Access-Provider hiernach als Störer in Frage, da die Verletzungshandlung nur durch die Herstellung der Internetverbindung möglich war. Jedoch umfasst eine Störerhaftung nach Ansicht des Hanseatischen Oberlandesgerichts nur eine Haftung auf Beseitigung und Unterlassen, nicht aber auf Auskunft.

Kommentar

Die „File-Sharing-Community“ begrüßt diese Entscheidung. Die Inhaber von Urheberrechten hingegen sind enttäuscht darüber, dass es nur schwer möglich ist, außerhalb eines Strafverfahrens Urheberrechtsverletzer zu identifizieren. Ihnen wird einmal mehr die Anonymität des Internets deutlich vor Augen geführt.

2. Bank & Finanzrecht

Refinanzierungsregistergesetz in Kraft

Das neugeschaffene Refinanzierungsregister ermöglicht bei bestimmten Vermögensgegenständen durch die True-Sale Fiktion in der Insolvenz des Originators eine Vereinfachung von Verbriefungsstrukturen

I. Refinanzierungsregister passiert den Bundesrat

Nachdem der Deutsche Bundestag am 30. Juni 2005 das Gesetz der Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters (nachfolgend “Refinanzierungsregistergesetz”) beschloss, stimmte auch der Bundesrat letzterem am 8. Juli 2005 zu. Das Gesetz wurde am 27. September 2005 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am 28.

de julio. Esta Ley fue publicada en el diario oficial alemán (*Bundesgesetzblatt* -equivalente al BOE) el 27 de septiembre de 2005 entrando en vigor el 28 de septiembre del mismo año. Debido a la situación política creada con motivo de las elecciones electorales, parecía improbable que se fuera a aprobar esta Ley en dicha legislatura. No obstante la reforma que introduce esta Ley queda claramente por debajo de lo que en un principio se planeó.

II. Constitución de un Registro de Refinanciación

Debido a la reforma introducida por la Ley reguladora del Registro de Refinanciación en la Ley reguladora del Régimen de Créditos (*Kreditwesengesetz*, en adelante **KWG**) pueden ser constituidos los registros de refinanciación. Los registros de refinanciación serán gestionados por entidades de crédito para sí mismas o para otras empresas y por administradores especialmente designados, bajo la supervisión del Instituto Federal Alemán para el Control de los Servicios Financieros (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*, en adelante **BaFin**). Entidades de crédito, más pequeñas, así como otras empresas, para las cuales la creación de un registro semejante suponga un coste demasiado alto, pueden o bien usar los servicios de registro de otras empresas, o bien valerse del Registro de Refinanciación dispuesto por el Instituto Federal Alemán de Créditos para la Reconstrucción (*Kreditanstalt für Wiederaufbau*, en adelante **KfW**).

III. Función del Registro de Refinanciación

En el caso de las transacciones de títulos de valor garantizados por derechos de crédito (*Asset-Backed-Securities*, en adelante "ABS"), a las cuales expresamente se refieren los fundamentos de la Ley, la institución originariamente titular del derecho de crédito o sociedad que necesita ser refinanciada enajena el derecho de crédito o título de acreedor a otra sociedad creada específicamente para este fin (en adelante "sociedad VPE" -vehículo de propósito especializado). La sociedad VPE financia la adquisición de los derechos de crédito emitiendo pagarés al mercado de capitales con la garantía de los propios derechos de crédito adquiridos. Cuando los derechos de crédito transmitidos garanticen una deuda inmobiliaria registrada, se tendrá que efectuar un duradero y costoso cambio en el Registro de la Propiedad.

Al mismo tiempo los pagarés emitidos por la sociedad VPE para su financiación sólo pueden obtener la requerida valoración para ejecutar transacciones ABS cuando esté asegurado, que la

September 2005 in Kraft. Aufgrund der sich wegen der Neuwahlen einstellenden politischen Dynamik erschien es zunächst noch zweifelhaft, ob das von Marktteilnehmern mit Spannung erwartete Gesetz in der betreffenden Legislaturperiode überhaupt verabschiedet werden würde. Allerdings bleibt das Gesetz hinter den ursprünglichen Reformplänen deutlich zurück.

II. Einrichtung eines Refinanzierungsregisters

Aufgrund des durch das Refinanzierungsregistergesetz geänderten Kreditwesengesetzes (**KWG**) können Refinanzierungsregister eingerichtet werden. Refinanzierungsregister werden von Kreditinstituten für sich oder für andere Unternehmen geführt und durch einen gesondert bestellten Verwalter unter der Obhut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (**BaFin**) überwacht. Kleinere Kreditinstitute, für welche die Einrichtung eines solchen Registers zu kostenintensiv ist oder andere Unternehmen können entweder die Registerdienste eines größeren Kreditinstitutes oder das von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (**KfW**) geführte Refinanzierungsregister in Anspruch nehmen.

III. Zweck des Refinanzierungsregisters

Bei den in der Gesetzesbegründung ausdrücklich genannten Asset-Backed-Securities (ABS) Transaktionen veräußert eine Gesellschaft (Originator oder Refinanzierungs-unternehmen) zur eigenen Refinanzierung Forderungen an eine eigens für die Zwecke dieser Transaktion gegründete Gesellschaft (Zweckgesellschaft). Diese Zweckgesellschaft finanziert den Erwerb der Forderungen über die Emission von Schuldverschreibungen am Kapitalmarkt, für die ausschließlich die ihr übertragenen Vermögenswerte haften. Werden Forderungen veräußert, welche mit Buchgrundschulden besichert sind, ist für die Übertragung der Buchgrundschulden üblicherweise eine zeitaufwendige und kostenintensive Änderung der Grundbucheintragung erforderlich.

Daneben können die zur Refinanzierung der Zweckgesellschaft begebenen Schuldverschreibungen ein für die ABS-Transaktion erforderliches Rating nur erhalten, wenn

sociedad VPE tiene una posición jurídica suficiente en relación con los títulos enajenados por la institución originaria y que la transmisión de estos y de sus correspondientes garantías no está supeditada a la insolvencia de la institución originaria (estructuras-*True Sale*).

La inscripción en el Registro de Refinanciación instaurada por la Ley reguladora del Registro de Refinanciación trae consigo, que los bienes en él registrados, en caso de insolvencia de la institución originaria puedan ser apartados por la empresa adquirente (en el caso de transacciones *ABS* normalmente la sociedad VPE) de acuerdo con el Art. 47 del Ordenamiento Alemán regulador de la Insolvencia (*Insolvenzordnung*). Con ello la sociedad VPE obtiene una posición jurídica comparable a la de titular de deudas inmobiliarias. El efecto de la inscripción en el Registro se extiende sólo sobre los bienes patrimoniales, que sean propiedad de la institución originaria o que estén a punto de ser transmitidos a la sociedad VPE. La clasificación jurídica de dichos bienes patrimoniales queda intacta, porque la inscripción en el Registro de Refinanciación no lleva consigo un traspaso de derechos. Lo que además supone que las objeciones o excepciones interpuestas por terceros contra los títulos de acreedor o derechos de crédito inscritos tampoco están en principio limitadas

IV. Repercusiones para las transacciones-ABS

Inscribibles en el Registro son tanto los títulos de acreedor como aquellos derechos de garantía inmobiliaria ya sean nacionales o extranjeros, cuya transmisión están facultados para exigir: sociedades VPE, entidades intermediarias de la refinanciación o bancos hipotecarios, según conste en el Registro. La Ley menciona expresamente, a diferencia del Proyecto de Jefes de Negociados, sólo los derechos de garantía inmobiliaria (por ejemplo: hipotecas o deudas inmobiliarias) como garantías inscribibles, lo que seguramente fomentará las llamadas *Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)* o *Commercial Mortgage Backed (CMBS)*, las cuales representan un derecho de propiedad sobre los créditos hipotecarios otorgados por instituciones financieras.

Debido a la formulación del apartado primero del Art. 22a KWG, según el cual para llevar a cabo la inscripción en Registro sólo se requiere un derecho a reclamar transmisión de quienes estén autorizados para ello, para lo cual basta con la existencia de una vinculación jurídica entre la sociedad VPE y la institución originaria del crédito. A través de la inscripción en el Registro, la sociedad VPE es, en

sichergestellt ist, dass die Zweckgesellschaft eine hinreichend sichere Rechtsstellung in Bezug auf die vom Refinanzierungsunternehmen veräußerten Vermögensgegenstände erlangt und die Übertragung der Vermögensgegenstände und dazugehöriger Sicherungsrechte insolvenzfest gestaltet ist (*True Sale*).

Die durch das Refinanzierungsgesetz jetzt mögliche Eintragung in das Refinanzierungsregister bewirkt, dass dort eingetragene Gegenstände im Fall der Insolvenz des Refinanzierungsunternehmens für den Übertragungsberechtigten (in der *ABS*-Transaktion üblicherweise die Zweckgesellschaft) nach § 47 Insolvenzordnung ausgesondert werden. Damit wird der übertragungsberechtigten Zweckgesellschaft eine dem tatsächlichen Inhaber von Grundschulden vergleichbare Rechtsposition eingeräumt. Die Wirkung der Eintragung bezieht sich nur auf Gegenstände, welche im Eigentum des Refinanzierungsunternehmens stehen oder – unmittelbar vor der Übertragung an die Zweckgesellschaft – standen. Die sachenrechtliche Zuordnung der Gegenstände bleibt dagegen unberührt, denn die Eintragung in das Register führt nicht zu einem Übergang von Rechten. Das bedeutet auch, dass die Einwendungen und Einreden Dritter gegen die eingetragenen Forderungen und Rechte grundsätzlich auch nicht eingeschränkt sind.

IV. Bedeutung für ABS-Transaktionen

Eintragungsfähig sind inländische und ausländische Forderungen, sowie solche absichernden Grundpfandrechte, auf deren Übertragung die im Register als übertragungsberechtigten eingetragenen Zweckgesellschaften, Refinanzierungsmittler oder Pfandbriefbanken einen Anspruch haben. Das Gesetz nennt, abweichend vom Referentenentwurf, ausdrücklich nur Grundpfandrechte (z. B. Hypotheken, Grundschulden) als eintragungsfähige Sicherheiten und wird damit sogenannten *Residential Mortgage Backed Securities (RMBS)* oder *Commercial Mortgage Backed (CMBS)* Transaktionen sicherlich deutlich Auftrieb geben können.

Aufgrund der Formulierung des ersten Absatzes des § 22a KWG, wonach für die Eintragung lediglich ein Übertragungsanspruch des Übertragungsberechtigten bestehen muss, ist ein wirksames Verpflichtungsgeschäft zwischen Zweckgesellschaft und Refinanzierungsunternehmen ausreichend. Durch die Eintragung in das Register wird die Zweckgesellschaft im Insolvenzfall so gestellt, als

caso de insolvencia, puesta en la posición jurídica de a quién se le hubiesen transmitido los bienes de manera efectiva. Dicha ficción jurídica tiene sólo efectos en los casos de insolvencia. En concreto, en el caso de títulos extranjeros la inscripción en el Registro no sustituye los requisitos de forma requeridos, por el ordenamiento jurídico eventualmente aplicable, para transmitir dichos títulos de manera efectiva. La transmisión "limpia" de los títulos de crédito no debería de causar mayores problemas en relación con títulos alemanes, y con respecto a títulos extranjeros debería de, al menos, facilitarse la transmisión de los títulos, aunque la efectividad de la transmisión de títulos de acreedor frente a deudores extranjeros no se debería de dar en todo caso.

Un aspecto interesante de la Ley es, que la pregunta acerca de la transferibilidad de los derechos de crédito bancario y acerca de la prohibición de la cesión de estos basada en el secreto bancario, pregunta que en mayo de 2005 fue fuertemente discutida en el mercado, ha sido regulada de paso. A este respecto la Ley señala que la transferibilidad no puede ser excluida ni a través de acuerdos verbales, ni de manera implícita; en cuanto a la prohibición de cesión por escrito permanece sin cambios la regulación dispuesta en el Art. 354a del Código Mercantil Alemán (*Handelsgesetzbuches*).

Frente a las ventajas de la nueva Ley de Registro de Refinanciación se encuentran desventajas las cuales no han sido convenientemente resueltas. En los casos en los que no se transmitan los créditos tal y como hasta ahora se hacía, sino que sólo sean inscritos en el Registro, aún podrá ser llevada a cabo con éxito la ejecución forzosa por parte del acreedor de la institución originariamente titular del crédito. La inscripción registral protege frente a la insolvencia pero no frente a la ejecución forzosa. Además la institución originariamente titular del crédito sigue pudiendo incautar, cargar o enajenar dicho derecho de crédito tras la transmisión del mismo. En este caso tendría que indemnizar a la sociedad VPE por daños y perjuicios, pero la inscripción registral no imposibilita este hecho. De igual modo, la Ley tampoco regula la repercusión de la inscripción en el balance. Se necesita en primer lugar un examen detallado, para saber si las transacciones-ABS también consiguen garantizar la perseguida reducción en el balance, cuando se renuncia a la transmisión de hecho de los derechos de crédito y esta sólo se suscribe a efectos registrales a la sociedad VPE. Una posible solución podría alcanzarse desde un punto de vista "económico", de manera que la institución originariamente titular del crédito mantuviese los bienes, osea los derechos de

seien ihr die eingetragenen Vermögensgegenstände wirksam übertragen worden. Diese Fiktion gilt jedoch nur für den Insolvenzfall. Insbesondere bei ausländischen Forderungen ersetzt die Eintragung solcher Forderungen in das Register nicht die gegebenenfalls nach ausländischem Recht erforderlichen Formvorschriften, um eine wirksame Übertragung der Forderungen zu bewirken. Saubere "true sale opinions" dürften in Bezug auf deutsche Forderungen nunmehr kein Problem darstellen, bei ausländischen Forderungen dürfte sich die Erstellung einer "true sale opinion" zumindest vereinfacht haben, wobei die Wirksamkeit der Übertragung der Forderung gegenüber ausländischen Debitoren nicht in jedem Fall gegeben sein dürfte.

Ein interessantes Detail des Gesetzes ist, dass die im Mai 2005 am Markt heftig diskutierte Frage der Abtretbarkeit von Bankdarlehensforderungen aufgrund eines aus dem Bankgeheimnis folgenden Abtretungsverbotes *en passant* geregelt wird. Die Abtretbarkeit soll weder bei mündlichen, noch bei konkludenten Abtretungsverboten ausgeschlossen sein, im Hinblick auf schriftliche Abtretungsverbote bleibt § 354a des Handelsgesetzbuches weiterhin unberührt.

Diesen Vorteilen stehen einige vom Refinanzierungsregistergesetz nicht befriedigend gelöste Nachteile gegenüber: Werden die Forderungen nicht wie bisher üblich übertragen, sondern nur in das Register eingetragen, kann ein Zugriff der Gläubiger des Originators durch Zwangsvollstreckung nicht sicher ausgeschlossen werden. Die Registereintragung ist demnach zwar „insolvenzfest“, aber nicht „zwangsvollstreckungsfest“. Zudem kann der Originator die Forderungen weiterhin einziehen, belasten oder veräußern. Hierdurch würde er zwar der Zweckgesellschaft gegenüber schadensersatzpflichtig, die Registereintragung verhindert ein solches Verhalten aber nicht. Auch die bilanziellen Folgen der Eintragung im Register sind unregelt. Es bedarf erst einer genauen Prüfung, ob sich die mit ABS-Transaktionen auch bezweckte Bilanzverkürzung sicherstellen lässt, wenn man auf eine tatsächliche Übertragung der Forderungen verzichtet und diese nur im Refinanzierungsregister der Zweckgesellschaft zuordnet. Möglicher Lösungsansatz könnte hier sein, dass bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise das Refinanzierungsunternehmen die Gegenstände treuhänderisch für die Zweckgesellschaft hält und bilanziell der Zweckgesellschaft zugerechnet werden

crédito, con carácter fiduciario para la sociedad VPE y en el balance se le imputasen estos títulos a la sociedad VPE.

La Ley reguladora del Registro de Refinanciación no será aplicable a las transacciones-ABS con distintos transmisores de derechos de crédito sobre una misma sociedad, sino se hacen las reestructuraciones oportunas. El derecho a reclamar la transmisión, imprescindible para llevar a cabo su inscripción, tiene que pertenecer según la terminología empleada por el legislador a una entidad, a la que se denomina intermediaria de la refinanciación (sociedad VPE). Dichas entidades intermediarias de la refinanciación, las cuales adquieren los derechos de crédito con la única finalidad de enajenarlos, sólo pueden serlo según la Ley de Refinanciación, las entidades de crédito. Para las transacciones-ABS, el uso del Registro de Refinanciación tiene que ser estructurado para que sea posible la compra directa de manos de la institución originariamente titular del crédito.

V. Comentario final

La Ley reguladora del Registro de Refinanciación abre posibilidades estructurales totalmente nuevas. Es suficiente para poder llevar a cabo la inscripción, la promesa de la institución originariamente titular del crédito de transmitir a la sociedad VPE el derecho de crédito titularizado, sin que sea necesario que este negocio jurídico haya sido llevado a cabo.

La Ley reguladora del Registro de Refinanciación se queda por debajo de lo que de ella se esperaba y deja sin solucionar muchos de los problemas existentes. Con respecto a la titularización de los derechos de garantía inmobiliaria que aseguran créditos bancarios predominan claramente las ventajas. Sólo un análisis detallado puede mostrar si esto también es aplicable en relación con la titularización de otros derechos de crédito. Hasta el momento sólo es pensable la utilidad del Registro de Refinanciación como una seguridad añadida a las hasta ahora existentes garantías de derechos no supeditadas a la insolvencia (estructuras-*True Sale*).

könnte.

Das Refinanzierungsregistergesetz wird zudem für ABS-Transaktionen mit mehreren Forderungsverkäufern, die Forderungen über eine Holdinggesellschaft veräußern, ohne weitere Strukturierung nicht anwendbar sein. Der für die Eintragung eines Gegenstandes erforderliche Übertragungsanspruch muss nach der Gesetzesterminologie einem sogenannter Refinanzierungsmittler gehören. Ein solcher Refinanzierungsmittler, welcher Forderungen zum Zweck der Weiterveräußerung erwirbt, kann nach dem Refinanzierungsgesetz nur ein Kreditinstitut sein. Für ABS-Transaktionen muss für die Nutzung des Refinanzierungsregisters somit ein Direktankauf von den Originators strukturiert werden.

V. Schlussfolgerungen

Das Refinanzierungsregistergesetz eröffnet gänzlich neue Strukturierungsmöglichkeiten. Es genügt für die Eintragung, wenn der Originator der Zweckgesellschaft die Übertragung der zu verbriefenden Forderungen und Sicherheiten verspricht, ohne dass dieses Geschäft vollzogen ist.

Das Refinanzierungsregistergesetz bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen zurück und löst verschiedene Probleme nicht. Bei der Verbriefung von durch Grundpfandrechte gesicherten Krediten überwiegen die Vorteile deutlich. Erst eine detaillierte Analyse kann zeigen, ob dies auch für die Verbriefung anderer Forderungen gilt. Insoweit ist auch denkbar, das Refinanzierungsregister nur zur zusätzlichen Absicherung bisheriger True Sale Strukturen zu nutzen.

II. Austria



1. Derecho Procesal Civil

Sobre la posibilidad de presentar una demanda colectiva en Austria

Las ocasiones son numerosas: cuestiones litigiosas contra bancos por la imposición de intereses, reclamaciones de indemnizaciones por daños y perjuicios tras daños cuantiosos, accidentes en funiculares o telesillas de los que resulten numerosos heridos - en este tipo de pretensiones se brinda la posibilidad de resolver, cuestiones de hecho y jurídicas fundadas en la misma causa, dentro de un único procedimiento. El Tribunal Supremo de Austria ha confirmado, que para estos casos también el derecho austriaco cuenta con una demanda colectiva. La versión austriaca de la demanda colectiva tiene sin embargo muy poco en común con su semejante americana, la llamada “*class action*”. Mientras en EEUU las demandas colectivas se elevan en base a las pretensiones, tras lo cual sus efectos pueden repercutir en personas, las cuales no se tomaron molestia alguna en perseguir el hecho en concreto; la versión austriaca condiciona la interposición de una demanda colectiva a la previa cesión por parte de los perjudicados de sus pretensiones a un representante para obtener una reparación común de los daños.

La cuestión litigiosa en la cual el Tribunal Supremo de Austria tomó esta decisión, se trataba de una reclamación de intereses por un importe de alrededor de 1,2 millones de euros, interpuesta contra un banco austriaco, por parte de cerca de 700 prestatarios representados por la Cámara de Trabajadores de Austria. Los cerca de 700 prestatarios habían cedido sus pretensiones a la Cámara de Trabajadores de Austria y el Tribunal Supremo de Austria declaró dicha cesión como lícita, siempre que las pretensiones cedidas estuviesen fundadas en “causas de pedir esencialmente del mismo tipo”.

Debido a esto a partir de ahora es posible que cuando se presenten reclamaciones esencialmente del mismo tipo, sólo se lleve a cabo un procedimiento judicial con efectos legales para cada uno de los demandantes, que hubiese cedido su pretensión a dicho representante común. Que manda el juicio

II. Österreich



1. Zivilprozessrecht

Über die Möglichkeit der Einbringung einer Sammelklage in Österreich

Die Anlässe sind vielfältig: Zinsstreitigkeiten mit Banken, Schadenersatzforderungen nach Großschäden, Mehrfachgeschädigte bei Seilbahn- oder Liftunglücken – bei dieser Art von Ansprüchen bietet es sich an, die im wesentlichen gleich gelagerten Sachverhalts- und Rechtsfragen in nur einem Prozess zu klären. Nun hat der Oberste Gerichtshof bestätigt, dass es für diese Zwecke auch eine Sammelklage nach österreichischem Recht gibt. Die österreichische Version einer Sammelklage hat jedoch mit dem Vorbild der *Class Action* aus den USA nur wenig gemein. Während die Klage in den USA für Ansprüche erhoben wird und dann auch Wirkungen für Personen entfalten kann, die sich in keiner Weise um die Verfolgung der Sache bemühen, setzt die österreichische Version einer Sammelklage voraus, dass die Geschädigten ihre Ansprüche einem Vertreter zur gemeinsamen Geltendmachung abtreten.

In jenem Fall, aufgrund dessen die Entscheidung des österreichischen Obersten Gerichtshofes erging, ging es um Zinsforderungen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, die rund 700 Kreditnehmer, die von der österreichischen Arbeiterkammer vertreten wurden, gegen eine österreichische Bank erhoben. Die rund 700 Kreditnehmer zedierten ihre Ansprüche der österreichischen Arbeiterkammer, und der Oberste Gerichtshof erklärte diese Zession für zulässig, wenn die zedierten Forderungen einen „im wesentlichen gleichartigen Anspruchsgrund“ haben.

Es ist deshalb möglich, dass in Zukunft für im wesentlichen gleichartige Ansprüche nur ein Verfahren geführt wird, jedoch entfaltet dieses Verfahren tatsächliche Wirkung lediglich für jene Kläger, die ihre Forderungen an den das Verfahren führenden Vertreter abgetreten haben.

contencioso.

2. Derecho Contractual

El acuerdo de un convenio arbitral requiere un contrato adicional

El supuesto de hecho presentado ante del Tribunal Supremo de Austria en relación con la eficacia de acuerdos arbitrales era el siguiente:

Las partes habían acordado un contrato de obra mediante la firma por ambas partes de una hoja de pedido. El contrato de obra se remitía a un índice de prestaciones. Este índice de prestaciones a su vez contenía una cláusula arbitral, de acuerdo con la cual todos los litigios derivados del contrato se someterían a arbitraje. Este índice de prestaciones no fue incorporado al contrato de obra por las partes contratantes, sino que el contrato hacía únicamente referencia al mismo. Tras el cierre de las negociaciones surgieron entre las partes cuestiones litigiosas acerca de si el acuerdo arbitral había sido acordado de manera efectiva o no. El Tribunal Supremo de Austria decidió, que para cumplir con el requisito de forma escrita del convenio de arbitraje no basta con una referencia general -incluida en un acuerdo firmado por las dos partes- a otro documento escrito, el cual contiene una cláusula de arbitraje, cuando este documento no se incorpora a dicho acuerdo. El Tribunal Supremo de Austria comprobó, que el contrato de obra que habían firmado las partes no contenía en sí mismo una cláusula de arbitraje y que dicho contrato tampoco incorporaba documento escrito alguno que incluyese una cláusula de arbitraje, por lo que entre las partes no se había acordado ningún convenio de arbitraje de manera efectiva.

Según la decisión del Tribunal Supremo de Austria, un convenio de arbitraje tiene que ser constituido siempre en forma escrita, o en documento intercambiado entre las partes mediante telegrama, télex o declaración electrónica. Este requerimiento de forma escrita garantiza la protección ante una renuncia, no reflexionada, al derecho a la protección jurídica ofrecida por los tribunales ordinarios. Por consiguiente, en este contexto, hay que tener en cuenta, que en la constitución del acuerdo de arbitraje no se pueden cumplir menos requisitos de forma que en el propio acuerdo contractual. Lo que pretende garantizar, que las partes actúen en este punto, el cual tiene numerosas consecuencias, de manera especialmente consciente. Esta interpretación estricta

2. Vertragsrecht

Die Vereinbarung eines Schiedsgerichtes bedarf eines Vertragszusatzes

Der Anlassfall für eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofes im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen war der Folgende:

Zwei Parteien schlossen einen Werkvertrag durch beiderseitige Unterfertigung eines Auftragschreibens. Der Werkvertrag verwies auf ein Leistungsverzeichnis. Dieses Leistungsverzeichnis selbst wiederum enthielt eine Schiedsklausel nach der alle Streitigkeiten aus dem Vertrag durch ein Schiedsgericht zu entscheiden sind. Dieses Leistungsverzeichnis wurde jedoch dem von den Vertragsparteien unterzeichneten Werkvertrag nicht angeschlossen, sondern dort wurde lediglich auf dieses Leistungsverzeichnis verwiesen. Nach Abschluss der Vereinbarung kam es zwischen den Vertragsparteien zu einem Streit darüber, ob die Schiedsvereinbarung gültig vereinbart wurde. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass es dem Gebot der Schriftlichkeit eines Schiedsvertrages nicht genügt, wenn in einer von beiden Vertragsparteien unterfertigten Vereinbarung nur ganz allgemein auf eine andere Urkunde hingewiesen wird, die eine Schiedsklausel enthält, die aber der unterfertigten Vereinbarung nicht angeschlossen ist. Der Oberste Gerichtshof stellte fest, dass der von den Vertragsparteien unterzeichnete Werkvertrag selbst keine Schiedsklausel enthalte und diesem Vertrag auch keine die Schiedsklausel enthaltene Urkunde angeschlossen sei, sodass zwischen den Parteien kein Schiedsvertrag wirksam vereinbart wurde.

Ein Schiedsvertrag muss nach der Entscheidung des Obersten Gerichtshofes immer schriftlich errichtet werden oder in Telegrammen, Fernschreiben oder elektronischen Erklärungen enthalten sein, die die Parteien gewechselt haben. Diese Formvorschrift dient dem Schutz vor einem übereilten Verzicht auf den Rechtsschutz vor den ordentlichen Gerichten. Weiters ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass an die Form der Schiedsvereinbarung nicht geringere Ansprüche gerichtet werden als an die Form des Vertragsabschlusses selbst. So soll gewährleistet werden, dass die Parteien in diesem folgenreichen Punkt besonders bewusst agieren. Die strenge Auslegung des Schriftlichkeitsgebotes hat also nicht nur Beweisfunktion, sondern soll auch den

del requisito de forma escrita no tiene como fin únicamente el cumplir una función probatoria, sino que pretende alertar a las partes contratantes. Cuando la cláusula de arbitraje no esté contenida en el mismo contrato, las partes contratantes tendrán que incorporar a dicho contrato un documento escrito el cual contenga el convenio de arbitraje, sólo así gozará dicho convenio de efectos jurídicos.

Vertragspartner warnen. Wenn nun die Schiedsklausel nicht selbst in die Vereinbarung aufgenommen werden soll, kann nur durch Anschließen einer eigenen Urkunde gewährleistet werden, dass die Vertragsparteien den Abschluss einer Schiedsvereinbarung wirksam vereinbaren.

III. Suiza



1. Abrogación de la Lex Koller

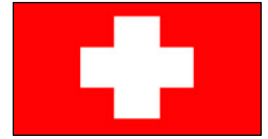
Se planea abrogar la Ley Federal Suiza reguladora de la Adquisición de Bienes Inmuebles en Suiza, por parte de personas "en el extranjero", la llamada Lex Koller

La adquisición de bienes inmuebles en Suiza por parte de personas "en el extranjero" tuvo un impulso tan fuerte tras la Segunda Guerra Mundial, que el Gobierno Federal tomó la decisión de sujetar esta a un requerimiento de aprobación previa. Esta decisión del Gobierno Federal fue sustituida por una Ley Federal en 1985, la llamada Lex Friedrich, la cual tenía el objetivo de impedir la adquisición de bienes inmuebles en Suiza por parte de personas "en el extranjero". Los puntos básicos de esta Ley eran:

- Requerimiento de aprobación previa a la adquisición de viviendas principales por parte de los extranjeros residentes en Suiza;
- Sistema de aprobación previa y cupo para la adquisición de apartamentos para vacaciones y apartamentos en apartoteles;
- Requerimiento de aprobación previa a la adquisición de bienes inmuebles, cuando ésta sirva al ejercicio de una actividad comercial de la empresa adquirente;
- Prohibición de la mera inversión de capital en bienes inmuebles.

Competente para otorgar la requerida aprobación era la Autoridad del cantón, en el cual se encontraba situado el bien inmueble. La Lex Friedrich fue derogada el 1 de octubre de 1997 por la llamada Lex Koller. Desde entonces, personas "en el extranjero" pueden adquirir bienes inmuebles destinados al ejercicio de actividades comerciales de una empresa sin necesidad de requerimiento de aprobación. Esta exención de requerimiento de aprobación es aplicable no sólo cuando usen los bienes inmuebles adquiridos, para su propia empresa, sino que las personas "en el extranjero" también pueden adquirir bienes inmuebles como meras inversiones de capital y

III. Schweiz



1. Aufhebung der Lex Koller

Geplante Aufhebung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken in der Schweiz durch Personen im Ausland, die so genannte Lex Koller

Der Grundstückerwerb in der Schweiz durch Personen im Ausland entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg so stark, dass er aufgrund eines Bundesbeschlusses einer Bewilligungspflicht unterstellt wurde. Dieser Bundesbeschluss wurde 1985 durch ein Bundesgesetz (sog. Lex Friedrich) ersetzt, welches bezweckte, den Grundstückerwerb in der Schweiz durch Personen im Ausland zu verhindern. Eckpunkte dieses Gesetzes waren:

- Bewilligungspflicht für den Erwerber von Hauptwohnungen durch in der Schweiz wohnhafte Ausländer;
- Bewilligungs- und Kontingierungssystem für den Erwerb von Ferienwohnungen und Wohneinheiten in Aparthotels;
- Bewilligungspflicht für den Erwerb von Grundstücken, die der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens des Erwerbers dienen;
- Verbot der blossen Kapitalanlage in Grundstücke.

Zuständig für die Erteilung der Bewilligung war die Behörde des Kantons, in dem das Grundstück liegt. Die Lex Friedrich wurde am 1. Oktober 1997 durch die sog. Lex Koller abgelöst. Seither können Personen im Ausland Grundstücke, die der Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit eines Unternehmens dienen, nicht nur bewilligungsfrei erwerben, wenn sie diese für ihre eigenen Unternehmen nutzen. Vielmehr können Personen im Ausland solche Grundstücke auch als reine Kapitalanlage erwerben und diese z.B. einem Dritten für eine Geschäftstätigkeit vermieten oder verpachten. Ebenfalls von der Bewilligungspflicht

alquilar o arrendar éstos, por ejemplo, a terceros para el ejercicio de una actividad comercial. Del mismo modo está eximida del requerimiento de aprobación previa la adquisición de viviendas principales, es decir, viviendas para el uso propio por parte de extranjeros residentes en Suiza.

Tras la entrada en vigor del Acuerdo entre Suiza y la Unión Europea sobre la Libre Circulación de las Personas de 1999 y de la reforma de 2001 del Convenio de la EFTA se modificó la Lex Koller, desde entonces los nacionales de estados miembros de la CE y de la EFTA, residentes en Suiza, están liberados del requerimiento de aprobación previa para adquirir cualquier tipo de bienes inmuebles en Suiza. En los años posteriores la Lex Koller se fue suavizando poco a poco, así por ejemplo, la transmisión de apartamentos para vacaciones dejó de ser sometida a sistema de cupo. La transmisión de apartamentos para vacaciones de extranjero a extranjero sigue estando aún sometida a requerimiento de aprobación.

El Consejo Federal Suizo (*órgano equivalente al Senado en España*) propuso, el pasado 2 de noviembre, la abrogación de la Lex Koller. En caso de que el Parlamento diese su derogación a esta propuesta del Consejo Federal Suizo, en el futuro todas personas "en el extranjero" podrían adquirir bienes inmuebles en Suiza sin necesidad de someterse a complicados procesos de aprobación. Así los extranjeros serían puestos en la misma posición que los nacionales suizos a la hora de adquirir cualquier tipo de bienes inmuebles en Suiza.

2. Derecho Bancario

No responsabilidad del banco por las transacciones llevadas a cabo sin autorización

Un asesor de inversiones de la UBS (compañía suiza prestadora de servicios financieros, en adelante "la Compañía") había efectuado para un titular de depósitos de títulos cientos de operaciones en relación acciones y derechos de suscripción. El asesor había dirigido en este sentido cerca de 40 transacciones sin contar con la correspondiente autorización de su Cliente. El Cliente había llamado por teléfono a dicho asesor y exigido de él cada vez, que anulase inmediatamente las transacciones realizadas. El empleado de banco sin embargo no reaccionó. Sólo una vez se habían producido pérdidas se dirigió el Cliente a la dirección de la Compañía y reclamó compensación de daños y perjuicios. El Juzgado de lo Civil de la ciudad de Basilea estimó la demanda del Cliente e impuso a la Compañía el pago de una indemnización de 212.000 francos suizos. El

befreit wurde der Erwerb einer Hauptwohnung, d.h. einer von einem Ausländer selbst genutzten Wohnung an seinem schweizerischen Wohnsitz.

Nach dem Inkrafttreten des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Schweiz und der EU von 1999 und der Änderung des EFTA-Übereinkommens von 2001 wurde die Lex Koller insofern abgeändert, als seitdem Staatsangehörige der EG- und EFTA-Mitgliedstaaten, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, für jeglichen Grundstückserwerb von der Bewilligungspflicht befreit sind. In den darauffolgenden Jahren wurde die Lex Koller verschiedentlich weiter gelockert; so ist z.B. die Übertragung von Ferienwohnungen nicht mehr der Kontingentierung unterstellt. Die Übertragung einer Ferienwohnung von Ausländern an Ausländer ist aber immer noch bewilligungspflichtig.

Der Schweizer Bundesrat hat am 2. November 2005 nunmehr vorgeschlagen, die Lex Koller aufzuheben. Sollte das Parlament der Vorlage des Bundesrates zustimmen, würden künftig alle Personen im Ausland Grundstücke in der Schweiz ohne ein kompliziertes Bewilligungsverfahren kaufen können. Ausländer würden somit für jeglichen Grundstückserwerb in der Schweiz den Schweizer Bürgern gleichgestellt.

2. Bankrecht

Keine Haftung der Bank für ohne Auftrag ausgeführte Transaktionen

Ein Anlageberater der UBS hatte für den Inhaber eines Wertschriftendepots mehrere hundert Aktien- und Optionsgeschäfte getätigt. Der Berater hatte dabei rund 40 Transaktionen in die Wege geleitet, ohne über einen entsprechenden Auftrag seines Kunden zu verfügen. Der Kunde hatte darauf jeweils beim Anlageberater angerufen und von ihm verlangt, die Transaktionen sofort rückgängig zu machen. Der Bankangestellte reagierte jedoch nicht. Erst nachdem tatsächlich Verluste eingetreten waren, informierte der Kunde die Direktion der UBS und forderte Schadenersatz. Das Zivilgericht Basel-Stadt sprach dem Kunden auf seine Klage hin CHF 212'000 gut. Das Basler Appellationsgericht wollte dem Kunden sogar CHF 1,6 Mio. Schadenersatz gewähren. Auf Berufung der UBS wies das Bundesgericht die Klage des Kunden indes ab.

Tribunal de Apelación de Basilea quería conceder al Cliente incluso una indemnización de 1,6 millones de francos suizos. La Compañía interpuso recurso ante el Tribunal Federal, el cual desestimó la demanda del Cliente.

El Tribunal Federal entendió que el Cliente no había reaccionado adecuadamente ante las transacciones no autorizadas por él, que había realizado el empleado del banco. Decisivo para ello eran las condiciones generales del contrato de la Compañía, de acuerdo con las cuales, el Cliente hubiera estado obligado a poner oposición inmediatamente contra los justificantes de depósito (*Depotauszüge*) “*si fuera posible, también telegráfica o telefónicamente*”. En el caso presente el Cliente no había cumplido dicha obligación. De los primeros justificantes de depósito era claramente deducible, que el asesor había ignorado las objeciones realizadas telefónicamente y había seguido llevando a cabo transacciones sin la autorización del Cliente. En esta situación era evidente que – y así lo entendió el Tribunal Federal (*Bundesgericht*) – “*cualquier persona sensata y que actúe correctamente, se hubiese dirigido bien por escrito bien telefónicamente a los superiores de su asesor*”, si se hubiese querido oponer “*en cualquier caso*” contra dichas transacciones. El Cliente tuvo que soportar que le reprocharan el no haber puesto oposición contra los justificantes de depósito de acuerdo a lo dispuesto en el contrato, y por esto se consideraron las transacciones objeto de la discusión como autorizadas por el Cliente. El Tribunal Federal (*Bundesgericht*) también se planteó la pregunta acerca de si la actuación del Cliente no era contraria a la buena fe (*Treu und Glauben*), ya que el Cliente sólo se había dirigido a la dirección del banco una vez comprobó que dichos transacciones realmente habían causado pérdidas.

Nach Ansicht des Bundesgerichtes hatte der Kunde auf die nicht autorisierten Transaktionen des Bankangestellten nicht angemessen reagiert. Ausschlaggebend waren die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UBS, nach denen der Kunden verpflichtet gewesen sei, Einwendungen gegen Depotauszüge unverzüglich anzubringen, “*wo tunlich, auch telegraphisch oder telefonisch*”. Im vorliegenden Fall sei der Kunde dieser Pflicht nicht nachgekommen. Aus den ersten Depotauszügen sei klar hervorgegangen, dass der Kundenberater die telefonisch erfolgten Beanstandungen schlicht ignorierte und weiterhin ohne Auftrag Transaktionen durchführte. In dieser Situation drängte es sich – so das Bundesgericht – “*jeder vernünftig und korrekt handelnden Person auf, sich entweder schriftlich oder gegebenenfalls auch telefonisch an den Vorgesetzten ihres Kundenberaters zu wenden*”, wenn die Transaktionen “*in tunlicher Weise*” beanstandet werden sollten. Der Kunde musste sich somit vorwerfen lassen, die Depotauszüge nicht vertragskonform beanstandet zu haben, weshalb die strittigen Transaktionen als genehmigt anzusehen waren. Das Bundesgericht stellte sich auch die Frage, ob das Verhalten des Kunden nicht gegen Treu und Glauben verstieß, indem er erst dann an die Direktion der Bank gelangte, nachdem feststand, dass die beanstandeten Geschäfte tatsächlich zu Verlusten geführt hatten.

IV. España



1. Asistencia Jurídica Gratuita

Mejora del acceso a la justicia en los litigios transfronterizos

Transposición al derecho interno español de la Directiva 2003/8/CE, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios

La Directiva 2003/8/CE se ha transpuesto al derecho interno español a través de la Ley 16/2005, de 18 de Julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Objetivo principal de la citada Directiva es la instauración de una serie de normas mínimas que garanticen un nivel adecuado de justicia gratuita para los asuntos transfronterizos en el conjunto de la Unión Europea.

La Directiva define el concepto de “litigios transfronterizos” como aquellos en los que la parte que solicita la justicia gratuita está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto de aquel otro Estado miembro donde se halle el Tribunal competente para su conocimiento o en el que deba ejecutarse la resolución.

Las reformas principales introducidas a consecuencia de la transposición al derecho interno español de dicha Directiva comunitaria se pueden resumir en los siguientes puntos:

I. Ampliación del colectivo de beneficiarios a favor de los nacionales de terceros países

Si bien los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea ya disfrutaban actualmente de acceso gratuito a la justicia en España en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles aunque no residan en nuestro país, tras la transposición de la Directiva, se amplía el colectivo

IV. Spanien



1. Prozesskostenhilfe

Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug

Umsetzung ins spanische Recht der Richtlinie 2002/8/EG vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen

Die Richtlinie 2003/8/EG wurde durch das Gesetz 16/2005 vom 18. Juli in spanisches Recht umgesetzt. Dieses modifiziert das Gesetz 1/1996 vom 10. Januar über die Prozesskostenhilfe.

Hauptzweck der erwähnten Richtlinie ist die Einführung von Mindeststandards zur Gewährleistung eines angemessenen Niveaus der Prozesskostenhilfe bei grenzüberschreitenden Rechtssachen in allen Ländern der Europäischen Union.

Die Richtlinie definiert das Konzept „Grenzüberschreitender Streitsachen“ als Streitigkeiten, in denen die beantragende Partei ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat des Gerichtsstands oder dem, in dem die Vollstreckung vollzogen wird, hat.

Die Hauptreformen, die auf Grund der Umsetzung dieser EG-Richtlinie in spanisches Recht, eingeführt wurden, können wie folgt zusammengefasst werden:

I. Erweiterung des Kreises der Begünstigten zugunsten von Staatsangehörigen dritter Länder

Obwohl die Staatsangehörigen aller übrigen EU-Mitgliedstaaten bereits Prozesskostenhilfe in Spanien unter denselben Voraussetzungen wie spanische Staatsangehörige unabhängig von ihrem Wohnsitz in Anspruch nehmen können, wird nach der Reform der Kreis der Begünstigten zugunsten Staatsangehöriger

de beneficiarios a favor de los nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros.

En España, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 95/2903, de 22 de mayo, que declaró inconstitucional el reconocer tal beneficio únicamente a los extranjeros que residan legalmente en España, la ley reconoce este derecho a todos los extranjeros que residan en España, sin hacer diferencia entre los que residen legalmente, o no.

II. Ampliación de las prestaciones comprendidas dentro de la asistencia gratuita

Tras la transposición de la Directiva se amplían las prestaciones comprendidas dentro de la asistencia gratuita como son los servicios de interpretación, la traducción de documentos presentados por el beneficiario a instancia del Tribunal o autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto, o gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante del derecho.

A este respecto hay que señalar que la normativa española existente reconoce este derecho también en favor de determinadas personas jurídicas como son (asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas en el registro mercantil). Sin embargo dichas personas jurídicas no gozan de esta ampliación de prestaciones introducida por la Directiva, ya que la Directiva sólo reconoce como beneficiarios del derecho de asistencia gratuita a personas físicas.

III. Ámbito objetivo

Con respecto al ámbito objetivo de los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil cabe destacar que este también comprende los litigios derivados de un contrato de trabajo. Así lo dispone el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

IV. Comentario final

Los derechos de justicia gratuita de que disfrutaban los nacionales de la Unión Europea se mantienen tras la reforma, ampliando este derecho en favor de los nacionales de terceros países que residan legalmente en otro Estado miembro. Estos gozarán de este derecho incluyendo las prestaciones como servicios de traducción etc. que la Directiva reconoce.

dritter Länder, die legal ansässig in einem Mitgliedstaat sind, erweitert.

Gemäß Urteil des spanischen Verfassungsgerichtes 95/2903 vom 22. Mai, das die Gewährung solcher Vorteile lediglich gegenüber legal Ansässigen als verfassungswidrig erklärt hat, erkennt das Gesetz in Spanien dieses Recht aller in Spanien ansässigen Ausländer, egal ob legal oder illegal, an.

II. Erweiterung der in der Prozesskostenhilfe enthaltenen Dienstleistungen

Durch die Umsetzung der Richtlinie werden die in der Prozesskostenhilfe enthaltenen Dienstleistungen, wie Dolmetscherleistungen, Übersetzung der vom Gericht oder von der zuständigen Behörde verlangten und vom Empfänger vorgelegten Schriftstücke, die für die Entscheidung des Rechtsstreits erforderlich sind, und Reisekosten, die vom Antragsteller zu tragen sind, erweitert.

Diesbezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass das spanische Gesetz dieses Recht bereits zugunsten bestimmter juristischer Personen (wie Gesellschaften für den öffentlichen Dienst und im Handelsregister angemeldeten Stiftungen) anerkennt. Trotzdem erfreuen sich diese juristischen Personen nicht der Erweiterung dieser Dienstleistungen, die durch die Richtlinie eingebracht wurde, da die Richtlinie als Begünstigten der Prozesskostenhilfe nur natürliche Personen anerkennt.

III. Objektiver Bereich

Im Hinblick auf den objektiven Bereich von zivil- und handelsrechtlichen Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug muss darauf hingewiesen werden, dass auch die aus den Arbeitsverträgen abgeleiteten Streitigkeiten erfasst werden. So wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen festgelegt.

IV. Ausblick

Das Recht zur Prozesskostenhilfe, über das die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten bereits verfügten, bleibt bestehen und wird gleichzeitig zugunsten Staatsangehöriger dritter Staaten erweitert. Diese werden auch auf konkrete Dienstleistungen wie Dolmetscherleistungen usw. der Richtlinie Anspruch haben.

Con respecto a los otros beneficiarios del derecho de justicia gratuita reconocidos por la legislación española y que la Directiva no incluye, como son los extranjeros que residen ilegalmente en España y las señaladas personas jurídicas, obtendrán asistencia jurídica gratuita de acuerdo a la legislación española, por lo que no disfrutarán de las prestaciones singulares que la Directiva reconoce y que la legislación española no contempla.

2. Derecho de Propiedad Intelectual

Transposición de la Directiva 2001/29/CE

Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual a través del cual se transpone al derecho interno español la Directiva Comunitaria 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual a través del cual se transpone la Directiva Comunitaria de la Sociedad de la Información. Dicha Directiva transpone a su vez al ámbito comunitario las principales obligaciones internacionales derivadas de los dos Tratados sobre los derechos de autor y derechos afines, aprobados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en diciembre de 1996.

Las novedades más relevantes que este Proyecto de Ley introduce son las siguientes:

I. Uso y explotación de obras en Internet

a. Regla general: autorización expresa del autor

Una de las novedades introducidas por este Proyecto de Ley es la regulación del derecho de puesta a disposición interactiva, para lo cual se requerirá la autorización expresa de los autores o de los titulares de los derechos. Además se establece la no-prescripción de los derechos morales del autor

b. Excepciones a la regla general

En determinados casos señala este Proyecto de Ley una limitación a los derechos de propiedad intelectual permitiendo que se reproduzcan, distribuyan, y comuniquen públicamente obras sin el consentimiento de sus autores.

In Bezug auf die anderen Begünstigten des spanischen Gesetzes, die von der Richtlinie nicht erfasst werden, wie Ausländer, die in Spanien illegal ansässig sind und die oben genannten juristischen Personen, wird Prozesskostenhilfe gemäß spanischem Recht gewährt. Das bedeutet, dass die mit der Streitsache verbundenen Kosten, die die Richtlinie erkennt und das spanische Gesetz nicht, nicht berücksichtigt werden.

2. Urheberrecht

Umsetzung der Richtlinie 2001/29/EG

Gesetzesentwurf zum Urheberrecht, durch den die Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft in spanisches Recht umgesetzt wird

Der Ministerrat hat die Verweisung des Gesetzesentwurfes zum Urheberrecht, durch den die Europäische Richtlinie über die Informationsgesellschaft umgesetzt wird, an das spanische Parlament genehmigt. Diese Richtlinie setzt die wichtigsten internationalen Verpflichtungen auf Gemeinschaftsebene um, die sich aus den beiden Verträgen ableiten, die im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) im Dezember 1996 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte geschlossen wurden.

Die wichtigsten Neuigkeiten, die dieser Gesetzesentwurf einführt, sind die Folgenden:

I. Nutzung und Verwertung von Werken im Internet

a. Generalklausel: Ausdrückliche Genehmigung des Urhebers

Eine der durch diesen Gesetzesentwurf eingeführten Neuigkeiten ist die Regulierung, das Recht interaktiv zur Verfügung zu stellen, wofür die ausdrückliche Genehmigung der Urheber oder der Rechtsinhaber Voraussetzung ist. Außerdem wird festgesetzt, dass Urheberpersönlichkeitsrechte nicht verjähren

b. Ausnahmen von der Generalklausel

In bestimmten Fällen setzt dieser Gesetzesentwurf den Urheberrechten Grenzen, indem er die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Bekanntmachung von Werken gestattet, ohne das Einverständnis des Urhebers zu fordern.

De este modo se establece que:

- Bibliotecas y establecimientos análogos podrán poner a disposición de los investigadores obras que formen parte de sus fondos, siempre que la difusión se realice a través de terminales de consulta especializadas y conectadas a una red cerrada e interna.
- Profesores de enseñanza reglada podrán utilizar las obras siempre que este uso se haga para la ilustración de actividades educativas. Esta limitación no incluye ni a los libros de texto, ni a los manuales universitarios, para cuyo uso y explotación se requerirá el mencionado consentimiento.
- La utilización de obras por personas discapacitadas, hasta ahora sólo posible para reproducción en lenguaje braille, se extiende a todos los tipos de discapacidades y utilizaciones.
- La utilización de obras y prestaciones en procesos judiciales se ha ampliado a trámites parlamentarios y a procesos relacionados con la seguridad.
- Será lícita la cita de obras ajenas ya divulgadas, de naturaleza escrita o audiovisual, con fines docentes o de investigación. Las reseñas o revistas de prensa tendrán la consideración de citas, pero no aquellas recopilaciones de artículos periodísticos que consistan en una mera reproducción con fines comerciales, lo que requerirá autorización del titular del derecho.

II. Endurecimiento de la regulación normativa contra la piratería

Con la reforma se introduce un nuevo tratamiento de la piratería, ya que se califica como infracción contra los derechos de autor el uso de actividades de hacking para eludir las medidas tecnológicas empleadas por los autores para proteger sus obras frente a la reproducción no autorizada. Dentro de la misma categoría se incluye la publicidad y promoción de dichos mecanismos destinados a eludir la protección de las obras.

Auf diese Weise wird bestimmt, dass:

- Bibliotheken und ähnliche Einrichtung dürfen Forschern solche Werken zur Verfügung stellen, die Teil ihrer Bestände und an ein internes Netz angeschlossen sind. Hierfür wird ferner vorausgesetzt, dass die Verbreitung der Werke über spezialisierte Befragungsterminals erfolgt.
- Staatlich angestellte Lehrer können die Werke nutzen, solange sie diese zu erzieherischen Zwecken verwenden. Diese Einschränkung schließt weder Schulbücher noch universitäre Lehrbücher ein, für deren Benutzung die oben genannte Zustimmung erforderlich wäre.
- Die Verwendung von Werken durch Behinderte, die bis jetzt nur zur Wiedergabe in Brailleschrift möglich war, wird auf alle Arten von Behinderungen und Verwendungen ausgeweitet.
- Die Nutzung von Werken und Dienstleistungen in Gerichtsprozessen wurde auf ihre Nutzung in parlamentarischen Verfahren und in mit der Sicherheit zusammenhängende Verfahren erweitert.
- Das Zitieren fremder, bereits veröffentlichter schriftlicher oder audiovisueller Werke zu Lehr- oder Forschungszwecken ist zulässig. Rezensionen und Zeitschriften werden als Zitate betrachtet, mit der Ausnahme von Sammlungen von Zeitungsartikeln zu ausschließlich kommerziellen Zwecken.. Hierfür wäre eine ausdrückliche Genehmigung des Rechtsinhabers erforderlich.

II. Verhärtung der Vorschriften zur Piraterie

Mit der Reform wird eine neue Behandlung der Piraterie eingeführt, da als Verletzung der Urheberrechte nun auch schon die Enthaltung von Aktivitäten zählt, die sich zur Umgehung technischer Maßnahmen eignen, durch die der Urheber seine Werke vor illegalen Vervielfältigungen zu schützen versucht. Dieselbe Kategorie umfasst auch die Veröffentlichung von und die Werbung für ebengenannte Mechanismen, um den Urheberschutz

Tanto las mencionadas actividades de hacking como su reproducción no tendrán la consideración de infracción, cuando estas medidas tecnológicas dispuestas por los autores para la protección de las obras frente a su reproducción, impidan el uso y reproducción permitido por la ley, es decir cuando se trate de los usos para los que la ley exime de la necesidad de autorización del autor.

III. Régimen de copias privadas en el ámbito digital

El Proyecto de Ley impone el pago de un canon a favor de los titulares de los derechos como compensación por la autorización de copia privada. El Proyecto prevé un plazo de cinco meses tras su aprobación para que todos los sectores implicados establezcan la relación de equipos, aparatos y soportes a los que se les impondrá dicho canon. De esta lista se excluyen expresamente los discos duros y las conexiones ADSL.

Comentario final

Mientras el ejecutivo asegura que el nuevo proyecto adecua el sistema de propiedad intelectual español a la realidad tecnológica y a la Sociedad de la Información, a la vez que homogeneiza la normativa española con la europea; los usuarios critican la reforma por su falta de claridad al no definir términos como “investigador” y al reducir de forma injustificada las posibilidades de expansión de la cultura gracias a las posibilidades que los avances tecnológicos hoy en día ofrecen.

Queda por ver cuál es la influencia que sentencias, como la que un Juzgado madrileño dictaminó el pasado 15 de junio de 2005, tienen en la versión final de la Ley. En la señalada Sentencia se califica la imposición de un canon en la compra de un CD-Rom en blanco como ilegal por falta de apoyo en una regulación legal, ya que el uso de dicho CD-Rom como soporte no tiene que ser necesariamente circunscrito a la reproducción de obras de pertenencia ajena.

3. LEY 6/2005, de 22 de abril, sobre saneamiento y liquidación de las entidades de crédito (BOE de 23/04/2005)

I. Objeto

zu umgehen.

Weder die genannten Piraterietechniken noch ihre Vervielfältigung werden als Verletzungen des Urheberrechts betrachtet, wenn die von den Urhebern eingesetzten technischen Maßnahmen, ihre Werke vor Vervielfältigungen zu schützen, die gesetzlich gestattete Verwendung und Vervielfältigung verhindern. Hier ist die Rede von den Verwendungen von Werken, für die der Gesetzgeber keine Genehmigung des Urhebers voraussetzt.

III. Regulierung von privaten Kopien im Digitalbereich

Der Gesetzesentwurf sieht die Zahlung einer Gebühr an den Rechtsinhaber zur Entschädigung für die Genehmigung von Privatkopien vor. Der Entwurf bestimmt eine Frist von fünf Monaten nach seiner Verabschiedung, innerhalb derer die betroffenen Wirtschaftszweige alle von der Gebühr erfassten Apparate, Geräte und Träger auflisten müssen. Von dieser Auflistung sind Festplatten sowie ADSL-Verbindungen ausdrücklich ausgeschlossen.

Kommentar

Während die Exekutive behauptet, der neue Gesetzesentwurf würde die Regelung des spanischen Urheberrechts der technologischen Realität und der Informationsgesellschaft anpassen sowie die spanische Regelung mit der Europäischen in Einklang bringen, wird die neue Regelung von den Nutzern kritisiert. Begriffe wie „Forscher“ würden nicht hinreichend definiert und wären unklar, und Möglichkeiten zur Kulturverbreitung, die heutzutage dank des Fortschritts der Technologie verwirklicht werden könnten, würden ungerechtfertigterweise eingeschränkt.

Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss Urteile auf die endgültige Version der Gesetze haben werden. Beispiel hierfür ist ein Gericht Madrids, das am 15. Juni 2005 die Erhebung einer Gebühr beim Kauf von CD-Rom Rohlingen als illegal qualifizierte, da eine gesetzliche Regelung diesbezüglich fehlte. Dies wiederum liess sich darauf zurückführen, dass die Verwendung einer CD-Rom als Datenträger nicht unbedingt die Vervielfältigung von Fremdwerken sein muss.

3. Gesetz 6/2005, vom 22 April, über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten (Spanische Gesetzblatt BOE von 23/04/2005)

I. Ziel

La Ley tiene por objeto incorporar al ordenamiento jurídico español las Disposiciones de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y liquidación de las entidades de crédito, regulando los efectos y especialidades de las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación que afecten a entidades de crédito y sucursales con actividad transfronteriza dentro del Espacio Económico Europeo.

II. Medidas de saneamiento y procedimientos de liquidación

Tendrá la consideración de medida de saneamiento en España la apertura del concurso en los términos previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Tendrá la consideración de procedimiento de liquidación en España la apertura de la fase de liquidación del concurso.

III. Competencia y ley aplicable

La Ley contiene normas de Derecho Internacional Privado en lo referente a ley aplicable y a la competencia. En este sentido, establece que las autoridades judiciales españolas serán las únicas competentes para decidir la aplicación a una entidad de crédito autorizada en España, incluidas las sucursales en otros Estados miembros de la UE, de una medida de saneamiento o de un procedimiento de liquidación.

Igualmente, se establece que será la ley española la que determine el régimen y aplicación de las medidas de saneamiento y del procedimiento de liquidación que afecten a las entidades de crédito autorizadas en España, incluidas sus sucursales en otros Estados miembros.

Asimismo, se enumeran los supuestos en los que cabe la aplicación de una legislación distinta de la española.

IV. Publicidad, información y derechos de los acreedores de otros Estados miembros

La Ley establece el régimen de publicidad de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales españolas.

Igualmente, se regula la forma en que la administración concursal informará a los acreedores conocidos que tengan su residencia habitual, domicilio o domicilio social en los demás Estados miembros.

Ziel dieses Gesetzes ist die Umsetzung des in der Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten Vorgeschiedenen in die spanische Rechtsordnung. Diese EG-Richtlinie reguliert die Auswirkungen und Besonderheiten der Sanierungsmaßnahmen und der Liquidationsverfahren, die auf solche Kreditinstitute und Zweigstellen anwendbar sind, die in mehr als in einem Mitgliedstaat tätig sind.

II. Sanierungsmaßnahmen und Liquidationsverfahren

Als Sanierungsmaßnahme gilt in Spanien die Eröffnung der Konkursverfahren gemäß dem spanischen Konkursgesetz 22/2003, vom 9. Juli.

Als Liquidationsverfahren wird in Spanien die Eröffnung der Liquidationsphase innerhalb des Konkursverfahrens betrachtet.

III. Zuständige Behörde und anwendbares Recht

Das Gesetz enthält international –privatrechtliche Normen des internationalen Privatrechts in Bezug auf das anwendbare Recht und die zuständigen Behörden. Diesbezüglich regelt das Gesetz, dass nur die spanischen Behörden dafür zuständig sind, über die Anwendung von Sanierungsmaßnahmen bzw. Liquidationsverfahren auf in Spanien zugelassene Kreditinstitute sowie Dependancen in anderen Mitgliedstaaten zu entscheiden.

Ebenfalls wird vorgeschrieben, dass die Regulation und Anwendung von Sanierungsmaßnahmen und Liquidationsverfahren gemäß spanischem Recht bestimmt wird, wenn diese sich auf in Spanien zugelassene Kreditinstitute auswirken, sowie auf ihre in anderen Mitgliedstaaten sitzenden Zweigstellen.

Ebenso werden die Sachverhalte aufgezählt, in denen die Anwendung eines anderen Gesetzes als des spanischen in Frage kommt.

IV. Publizität, Information und Schutz für Gläubiger anderer Mitgliedstaaten

Das Gesetz ordnet ein Veröffentlichungssystem der von den spanischen Behörden getroffenen Entscheidungen an.

Ebenfalls wird die Form geregelt, in der die bekannten Gläubiger, die in anderen Mitgliedstaaten privat- oder geschäftsansässig sind, von der Konkursverwaltung informiert werden.

La Ley determina que los títulos de crédito de estos acreedores tendrán el mismo trato y la misma prelación que aquellos títulos con rango equivalente presentados por los acreedores con residencia habitual, domicilio o domicilio social en España.

V. Efectos en España de la adopción de medidas de saneamiento y procedimientos de liquidación

En relación con entidades de crédito autorizadas en un Estado miembro de la UE que tengan al menos una sucursal o presten servicios en España, se establece que las medidas adoptadas y los procedimientos incoados en otro Estado miembro surtirán, sin más formalidades, todos sus efectos en España tan pronto como lo hagan en el Estado miembro en el que se haya adoptado la medida o incoado el procedimiento.

Das Gesetz legt fest, dass die Forderungen dieser Gläubiger gleich behandelt werden und über denselben Rang verfügen sollen, wie die der in Spanien privat- oder geschäftsansässigen Gläubigern.

V. Auswirkungen in Spanien von beschlossenen Sanierungsmaßnahmen bzw. Liquidationsverfahren

In Bezug auf in anderen EU-Mitgliedstaaten zugelassene Kreditinstitute, die mindestens eine Zweigstelle haben oder in Spanien tätig sind, wird Folgendes vorgeschrieben: Die Sanierungsmaßnahmen bzw. die Verfahren, die in anderen Mitgliedstaaten beschlossen wurden, werden in Spanien wirksam, ohne dass andere Formalitäten vorausgesetzt werden, sobald sie in dem entsprechenden Mitgliedstaat wirksam sind.

Barcelona

Avenida Diagonal, 652
Edif. D, 8th Floor
08034 Barcelona
Tel.: (34 93) 280 5900
Fax: (34 93) 205 4959

Düsseldorf

Neuer Zollhof 2
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 31 11 6 0
Fax: +49 (0) 211 31 11 6 199

Madrid

Paseo de la Castellana, 92
28046 Madrid
Tel.: 34 91 230 45 00
Fax: 34 91 391 51 45

Wien

Schubertring 2
1010 Wien, Austria
Tel.: +43 (1) 51 660
Fax: +43 (1) 51 660 60

Berlin

Friedrichstrasse 79 - 80
10117 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 20 38 7 600
Fax: +49 (0) 30 20 38 7 699

Frankfurt

Bethmannstrasse 50-54
60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 2 99 08 0
Fax: +49 (0) 69 2 99 08 108

München

Theatinerstrasse 23
80333 München
Tel.: +49 (0) 89 5 52 38 0
Fax: +49 (0) 89 5 52 38 199

Zürich

Zollikerstrasse 225
8034 Zürich
Tel.: +41 (1) 384 14 14
Fax: +41 (1) 384 12 84

**Persona de contacto |
Ansprechpartner****Dr. Bernhard Trappehl**

Theatinerstrasse 23
80333 München
Tel.: +49 (0) 89 5 52 38 0
Fax: +49 (0) 89 5 52 38 199

Mag. Gerhard Eichberger

Schubertring 2
1010 Wien
Tel.: +43 (1) 51 660
Fax: +43 (1) 51 660 60

Dr. Urs Zenhäusern

Zollikerstrasse 225
8034 Zürich
Tel.: +41 (1) 384 14 14
Fax: +41 (1) 384 12 84

Norman Heckh

Paseo de la Castellana, 92
28046 Madrid
Tel.: (34 91) 230 45 00
Fax: (34 91) 391 51 45

Almaty | Amsterdam | Antwerpen | Bahrain | Baku | Bangkok | Barcelona | Berlin | Bogotá | Bologna | Brasília
| Brüssel | Budapest | Buenos Aires | Calgary | Caracas | Chicago | Chihuahua | Dallas | Düsseldorf | Frankfurt am Main |
Genf | Guadalajara | Hanoi | Ho-Chi-Minh-Stadt | Hongkong | Houston | Jakarta | Juárez | Kairo | Kuala Lumpur
| Kiew | London | Madrid | Mailand | Manila | Melbourne | Mexiko-Stadt | Miami | Monterrey (Mexiko) |
Moskau | München | New York | Palo Alto | Paris | Peking | Porto Alegre | Prag | Riad | Rio de Janeiro
| Rom | San Diego | San Francisco | St. Petersburg | Santiago de Chile | São Paulo | Shanghai | Singapur | Stockholm |
Sydney | Taipeh | Tijuana | Tokio | Toronto | Valencia (Venezuela) | Warschau | Washington D.C. | Wien | Zürich

Baker & McKenzie International ist ein Verein nach dem Recht der Schweiz. Mitglieder von Baker & McKenzie International sind die weltweiten Baker & McKenzie-Anwaltsgesellschaften. Der allgemeinen Übung von Beratungsunternehmen folgend, bezeichnen wir als "Partner" einen Freiberufler, der als Gesellschafter oder in vergleichbarer Funktion für ein Mitglied von Baker & McKenzie International tätig ist. Als "Büros" bezeichnen wir die Kanzleistandorte der Mitglieder von Baker & McKenzie International.